

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020).

AUTO INTERLOCUTORIO No. \_\_\_\_\_.

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

MEDIO DE CONTROL:	REPETICIÓN
EXPEDIENTE:	76001-33-33-0019-2018-00312-01.
DEMANDANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL <a href="mailto:Deval.notificacion@policia.gov.co">Deval.notificacion@policia.gov.co</a>
DEMANDADO:	FRANCISCO JAVIER CHAMORRO HERNANDEZ <a href="mailto:Francisco.chamorro@correo.policia.gov.co">Francisco.chamorro@correo.policia.gov.co</a>
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO QUE RECHAZÓ LA DEMANDA DE REPETICION POR CADUCIDAD – CONFIRMA.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante contra el auto proferido **en audiencia inicial** por el juzgado diecinueve administrativo de Cali, que declaró probada la excepción de caducidad.

II. ANTECEDENTES

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional demandó al señor Francisco Javier Chamorro Benavides para que reintegrara la suma de \$ 122.192.290.81 millones que la entidad pagó mediante Resolución nro. 1581 del 30 de noviembre de 2016 en cumplimiento de una sentencia judicial proferida dentro del medio de control de reparación directa bajo el radicado 76001333170420080038501.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

El juzgado declaró probada la excepción de caducidad por lo siguiente (fl. 121):

La sentencia de segunda instancia base de repetición quedó ejecutoriada el **18 de junio de 2014**<sup>1</sup> y el plazo para el pago de la condena venció el 19 de diciembre de 2015, por lo que la entidad tenía hasta el 19 de diciembre de 2017 para promover el medio de control, sin embargo, la demanda sólo fue prestada hasta el **13 de diciembre de 2018**, según acta individual de reparto visible a folio 84.

Explicó que si bien el artículo 164.2 literal b) de la Ley 1437 de 2011 debe interpretarse conjuntamente con el artículo 192 del mismo estatuto, que consagra que el plazo para el pago de la condena es de 10 meses, en este caso no se aplica porque el proceso que da origen a la repetición fue regido por el Decreto 01 de 1984, por lo que debe acudirse a las reglas del inciso cuatro del artículo 177 y en esa medida, el plazo es de 18 meses.

Finalmente, indicó que, si bien podría alegarse que el término de caducidad se cuenta a partir del pago de la condena, la cual data del 16 de diciembre de 2016 según certificación

<sup>1</sup> Ver folio 62

que obra a folio 82, dicha tesis no es de recibo porque los dos años de la caducidad cuentan desde el pago siempre que se haga dentro de los 18 meses.

#### IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La parte actora alega que la demanda es oportuna porque el pago se hizo a raíz de la Resolución nro. 1581 del 30 de noviembre de 2016, el 16 de diciembre de 2016, conforme a la disponibilidad presupuestal y turno de pagos.

#### V. CONSIDERACIONES:

##### V.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

¿La caducidad del medio de control de repetición se cuenta desde la fecha del pago **el 16 de diciembre de 2016** atendiendo la disponibilidad presupuestal, o desde el plazo legal máximo para el cumplimiento de la condena ejecutoriada **el 18 de junio de 2014** conforme a la norma procesal vigente para esa fecha?

##### V.2. TESIS

El término de caducidad se cuenta desde el vencimiento del plazo legal máximo de 10 meses para el cumplimiento de la condena, establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, esto es, a partir 18 de abril de 2015, y hasta el 18 de abril de 2017, porque la providencia que funda la repetición quedó ejecutoriada en su vigencia, y, porque la fecha de pago, solo se tiene en cuenta para efectos de caducidad, si se hace antes de los 10 meses.

Por lo tanto, se confirmará la decisión de primera instancia, pero por las razones que a continuación se exponen.

##### V.3. CADUCIDAD – RECuento NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL:

Para efectos de la decisión la Sala tiene en cuenta las siguientes disposiciones legales y pronunciamiento judiciales.

El artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente: *“Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado...”*

Por su parte, el artículo 164 del C.P.A.C.A., establece la oportunidad para presentar las demandas, indicando para el medio de control de Repetición como oportunidad el siguiente término: *“1) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este código”.*

La Sección Tercera del Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha señalado la finalidad de la caducidad en el ordenamiento jurídico como *“una sanción en los eventos en que determinados medios de control no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional”*<sup>2</sup>, haciendo énfasis en que la figura de la caducidad tiene como fundamento la seguridad jurídica, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo.

El Consejo de Estado en 2017 se pronunció sobre la caducidad del medio de control de repetición (i) conforme a la ejecutoria del fallo base de recaudo y (ii) el límite máximo para el cumplimiento de la sentencia, así<sup>3</sup>:

1. El artículo 136 del CCA señalaba que los dos años del término de caducidad de la acción de repetición se contabilizaba a partir del día siguiente al pago total de la condena impuesta efectuado por la entidad, disposición que fue condicionada por **la Corte Constitucional en la sentencia C-832/01 cuando consideró que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso 4 del artículo 177 del CCA.**
2. El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición en aplicación del CCA se efectúa de la siguiente manera: a) la entidad cuenta con 18 meses para pagar la condena impuesta en su contra, los cuales se cuentan a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, una vez vencido dicho plazo inicia el cómputo de los 2 años para presentar la demanda de repetición y **b) si la entidad condenada cancela el valor dentro de los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA, el termino de 2 años inicia su cómputo a partir de la fecha en que se hizo el pago.**
3. El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición en aplicación del CPACA se efectúa de la siguiente manera: a) la entidad cuenta con 10 meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia para pagar la condena impuesta en su contra, una vez vencido dicho plazo, inicia el cómputo de los 2 años para presentar la demanda de repetición y **b) si la entidad condenada cancela el valor dentro de los 10 meses de que trata el artículo 192 del CPACA, el termino de 2 años inicia su cómputo a partir de la fecha en que se hizo el pago.**
4. Para ambas codificaciones, CCA y CPACA, rige la siguiente regla: si el pago de la condena impuesta se efectúa dentro del término que tenía la administración para cancelar al demandante (CCA: 18 meses y CPACA: 10 meses), la fecha del pago será el criterio para contar el término de caducidad; pero si ese término se vence sin que haya ocurrido el desembolso, será a partir del vencimiento de dicho término que comenzará a correr el plazo para la interposición de la demanda.
5. Sobre dicha conclusión, la sentencia del Consejo de Estado relacionada en precedencia, manifestó que *“Vale la pena aclarar que no resulta potestativo para el interesado establecer el momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad,*

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A - Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA - Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) - Radicación número: 20001-23-39-003-2015-00565-00(59291)

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 8 de marzo de 2017, expediente: 150012333000201600585-01 (58568) C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.



*pues la disposición es clara en señalar que operará en el evento que primero ocurra. Lo anterior es así, por cuanto razonar en otro sentido implica concluir que la caducidad quedaría suspendida indefinidamente en el tiempo, en manos de quien debe cumplir la obligación de pagar totalmente una condena o las obligaciones indemnizatorias equiparables.”*

6. Frente a dicha modificación legal, resulta fundamental tener en cuenta el momento en el que la obligación legal se hizo exigible para la entidad en cuestión, esto, en aras de determinar si le era aplicable, en lo que al plazo para pagar la condena se refiere, lo previsto en el Código Contencioso Administrativo -18 meses-, o por el contrario, lo que es propio a la luz de lo dispuesto en el C.P.A.C.A. -10 meses-.
7. **Para dicho fin, hay que tener en cuenta lo expuesto en el artículo 308 del CPACA que regula el régimen de transición de la Ley 1437 y establece que dicho código comenzará a regir el 2 de julio de 2012.**

#### V.4. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328<sup>4</sup> del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>5</sup> del CPACA, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandante, pronunciándose **solamente** sobre los argumentos en él expuestos.

El apelante consideró que el medio de control es oportuno porque el término de caducidad se cuenta desde el pago de la condena, aunque sea posterior a los 18 meses de que trata el Decreto 01 de 1984, atendiendo la disponibilidad presupuestal y los turnos para el efecto.

Sin embargo, su argumento carece de soporte legal porque, conforme impone la ley 1437 de 2011, interpretada a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el plazo máximo para pagar es de 10 meses para las providencias que queden ejecutoriadas en su vigencia.

Además, la jurisprudencia también ha decantado que el estatuto procesal es enfático en imponer que el pago solo se tomará como referente del cómputo de la caducidad cuando se haga antes del plazo máximo legal de los 10 meses.

Así las cosas, como la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el **18 de junio de 2014<sup>6</sup>**, el plazo de los dos años se computa desde los 10 meses siguientes, es decir, el **18 de abril de 2015** y va hasta el **18 de abril de 2017** sin importar que la resolución de pago sea de 30 de noviembre de 2016 y el pago efectivo se haya efectuado el día 16 de diciembre de 2016.

Entonces, la demanda radicada el 13 de diciembre de 2018 no es oportuna.

Finalmente se resalta que el Consejo de Estado ha precisado que no es posible dejar a la voluntad del interesado elegir el momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad,

<sup>4</sup> ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

<sup>5</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

<sup>6</sup> Ver folio 62

pues de esta manera quedaría suspendido indefinidamente en el tiempo, violando la norma de orden público y obligatorio cumplimiento que consagra dicho termino<sup>7</sup>.

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión,

### RESUELVE:

**PRIMERO. - CONFIRMAR** el auto interlocutorio sin número de fecha 20 de febrero de 2020, proferido por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali, mediante el cual declaró probada la excepción de caducidad, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO. – Sin costas** en esta instancia.

**TERCERO. - DEVOLVER el expediente híbrido** al juzgado de origen, previo registro en siglo XXI.

La decisión adoptada en la presente providencia fue discutida y aprobadas en sala virtual de la fecha, según consta en acta de que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad públicas que se presenta en el país a raíz del COVID- 19.

### NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

  
**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**  
Magistrada

  
**VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ**  
Magistrado

  
**ZORANNY CASTILLO OTALORA**  
Magistrada

<sup>7</sup> CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A - Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA - Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018) - Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00288-01(61063). "La demandante contabilizó equivocadamente el término de caducidad de 2 años, pues lo hizo a partir de la fecha en que se realizó el último pago a favor de los familiares del señor Jorge Enrique Castro Rincón, sin tener en cuenta que, para entonces, (14 de abril de 2015), se había superado el término de 18 meses que la ley concedía para pagar la condena. Olvidó la actora, entonces: i) que los 2 años de la caducidad se contabilizan a partir del pago, pero siempre que éste se haga dentro del plazo de 18 meses que el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo concede para tal efecto y ii) que trascurrido este último plazo sin que se hubiese efectuado el pago, como sucedió en este caso, los 2 años de caducidad se contabilizan desde el vencimiento del mismo, esto es, desde el vencimiento de dichos 18 meses"